

SEPTIEMBRE 18 DE 1900

57ª REUNION — Continuación de la 41ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARCO AVELLANEDA

MINISTRO PRESENTE: de Justicia e Instrucción Pública, doctor Osvaldo Magnasco.  
 DIPUTADOS PRESENTES: Alfonso, Argañaraz, Argerich, Astrada, Avellaneda (F. F.), Avellaneda (M.), Balaguer, Balestra, Barraquero, Barraza, Barroavella, Benedit, Bermejo, Berríos, Berrondo, Billoordo, Bollini, Bosch, Carbó, Carlés, Carrasco, Carreras, Castellanos (J.), Centeno, Claros, Cullen, Dantas, Demaría, Ezquer, Faicón, Ferrari, Gálvez, García, Gigena, Godoy (E.), Godoy (M.), Gómez (C. F.), Gouchon, Helguera, Iriondo (M.), Lacasa, Lacaverna, Lagos, Lartigueau, Leguizamón, Leiva, Loureyro, Luro, Martínez, Moreno, Olivera, Outes, Palacio, Pano, Parera (F. M.), Ramos Mexía, Reyna, Robert, Roberts, Rosas, Ruiz, Salas, Sánchez, Santa Coloma, Santamarina, Seguí, Silva, Tissera, Torino, Torres, Ugarriza, Ugarte, Usandivaras, Valenzuela, Varela Ortiz, Vedia, Videla, Vivanco, Yofre, Zavalla; AUSENTES, CON LICENCIA: Avellaneda (M. M.), Capdevila, de la Colina, Coronado, Loveyra, Lliedial, Morel, Olmos, Romero, Serú; CON AVISO: Alvarez, Belderrain, Bore, Bouquet Roldán, Casares, Garzón, Hernández, Machado, Peña, Quintana, Sarmiento, Soldati; SIN AVISO: Bruchman, Cantón, Castellanos (A.), Echegaray, Ponrouge, Gómez (M.), González, Iriondo (U.), Laferrère, Lassaga, Massey, Rivas, Serna.

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo solicitando autorización para celebrar un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a fin de designar un tribunal arbitral encargado de resolver sobre el mejor derecho de propiedad que tenga la Nación o la provincia a los terrenos sobrantes del parque 3 de Febrero.

II.—Despacho de comisión.

III.—Proyecto de ley del señor diputado Ramos Mexía reduciendo los derechos de aduana que pagan las lonas para cubrir parvas.

2.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado relativo a las demandas contra la Nación.

3.—Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Instrucción Pública sobre reformas de la enseñanza secundaria.

—En Buenos Aires, a 18 de Septiembre de 1900, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara reabierto la sesión siendo las 3 y 40 p. m.

1

## ASUNTOS ENTRADOS

I

Buenos Aires, Septiembre de 1900.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

El señor Enrique Barros, a nombre de la provincia de Buenos Aires, ha presentado al Poder Ejecutivo el escrito que en copia acompaño, proponiendo un arreglo *ad referendum* para que se reconozca a favor de la provincia el derecho de propiedad a cuarenta y ocho hectáreas próximamente de tierras situadas en las adyacencias del parque 3 de Febrero, que están actualmente en poder de la Nación y de la Municipalidad de la Capital.

En el año 1891, el apoderado de la provincia instauró acción reivindicatoria contra la Municipalidad por los terrenos sobrantes del parque

3 de Febrero, y la Suprema Corte falló estableciendo que el parque entregado por la provincia a la Nación constaba de 4.950.000 metros cuadrados, y declaró que la acción no procedía porque no era la Municipalidad sino la Nación la propietaria o poseedora de las tierras.

Por orden de la Corte se hizo la mensura de las tierras; pero esta mensura quedó sin aprobación, y así pasó el expediente al archivo, por resolución de la misma Corte.

Las tierras reclamadas proceden de adquisiciones privadas que hizo don Juan Manuel de Rozas, cuyos bienes fueron confiscados por una ley de la Legislatura provincial después de su caída. De aquí parte el derecho que invoca el reclamante para sostener la propiedad de la provincia.

La ley de federalización de 21 de Septiembre de 1880 y 6 de Diciembre del mismo año, cedió el territorio de esta Capital a la Nación, cesión que después fué ampliada con los municipios de Flores y Belgrano, por ley de 29 de Septiembre de 1887.

La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el alcance de estas leyes y los arreglos que las siguieron sobre el dominio privado de todos los terrenos comprendidos en las cesiones recordadas. De modo que habría que establecerse previamente si la cesión de los municipios nombrados comprendía o no a todos esos terrenos adyacentes al parque.

Hay aquí una cuestión muy digna de ser tomada en consideración por el gobierno nacional, aparte de su fase jurídica por el desprendimiento con que obró la provincia al ceder su gran ciudad para capital de la República; y para resolverla el Poder Ejecutivo cree que la manera más propia es la de constituir un tribunal arbitral que dirima los puntos concernientes a este reclamo.

Puesta esta idea privadamente en conocimiento del gobierno de la provincia, éste ha manifestado estar conforme. Por ello, el Poder Ejecutivo juzga oportuno someter al Honorable Congreso el adjunto proyecto de ley, por el cual pide autorización para la formación del tribunal arbitral que ha de resolver sobre esta cuestión.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JULIO A. ROCA.  
Felipe Yofré.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para que, de acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, proceda a la constitución de un tribunal arbitral, encargado de resolver sobre el mejor derecho de propiedad que tenga la Nación o la provincia, a los terrenos sobrantes del Parque 3 de Febrero.

Art. 2º — El gasto que ocasione esta ley se imputará a la misma.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*F. Yofré.*

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

## II

### Despacho de comisión

#### AGRICULTURA:

En las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley de policía sanitaria animal.

—A la orden del día.

## III

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Añádase a la lista de artículos comprendidos en el inciso 9º del artículo 2º de la ley de aduana, número 3.890, los siguientes: lonas cosidas, para cubrir parvas.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Ezequiel Ramos Mexía.*

Sr. Ramos Mexía. — Pido la palabra. Voy a fundar brevemente el proyecto que he tenido el honor de presentar. Es sencillo en su apariencia, pero estoy seguro que si se sanciona prestará grandes servicios a la agricultura.

Hasta este momento, las lonas que se importan al país pagan derechos altísimos, casi prohibitivos. Las lonas introducidas llevan un aforo de 50 centavos oro, a pesar de tener 20 de valor las de tercera calidad, que son las que conviene utilizar por la agricultura; pagan 25 por ciento de derecho ad valorem, más 2 por ciento adicional, más 5 por ciento. Así, por ejemplo, una lona que cuesta en Inglaterra 237 pesos oro los mil kilos, llega a pagar por derechos de aduana la cantidad de pesos 162,35 oro, es decir, pagan en realidad, 68 por ciento, no sólo por el derecho de 25 por ciento que les corresponde, sino por el aforo casi triple que se le ha adjudicado. Esto con respecto a las lonas que entran en pieza. Las lonas cosidas tienen un recargo de derecho de 50 por ciento, porque se las considera como confecciones; de donde resulta que vienen a pagar en realidad, gracias al aforo, que es el mismo para unas como para otras, un derecho de importación del ciento por ciento. Es, como dije antes, un derecho absolutamente prohibitivo, y es necesario tener presente que la lona para tapar parvas es un artículo tan necesario para el agricultor como lo es el arado, la rastra, la segadora y todos los implementos que se emplean para la recolección de las cosechas.

Es inútil que los agricultores se desvivan por tener una buena cosecha, si luego de haberla obtenido, cuando el trigo está en la parva, viene un aguacero y se le moja, perdiendo, si no la totalidad, por lo menos una gran parte de su valor, por el mal estado en que se presentará en plaza.

Como la lona es un implemento tan necesario como el arado y la rastra, he creído que las mismas razones que ha tenido el Congreso para reducir al 5 por ciento los derechos de importación de esos artículos, existen también respecto de este otro.

La modificación que importa este proyecto no disminuirá en nada la renta fiscal, porque sólo noventa y cuatro mil pesos han producido los derechos

en el año pasado sobre toda clase de lonas, incluso las destinadas a la fabricación de alpargatas, toldos, etcétera, en cambio con el derecho de 5 por ciento, una vez que sea fácil para todos los agricultores la adquisición de este artículo, la gran importación que será la consecuencia, cubrirá con creces la diferencia que hubiera podido producirse por la reducción de los derechos, para un artículo que en realidad se emplea muy poco en el presente por las causas apuntadas.

En mérito de estas consideraciones, espero que este proyecto merecerá el apoyo de mis honorables colegas para pasar a comisión, y pido a ésta que se sirva despacharlo a la brevedad posible porque sería conveniente fuera ley antes de las próximas cosechas, que temo corran grandes peligros con las continuas lluvias que están cayendo y que amenazan seguir.

He dicho.

—Suficientemente apoyado, pasa a la Comisión de Presupuesto.

2

#### DEMANDAS CONTRA LA NACION

**Sr. Varela Ortiz.** — Pido la palabra. Siendo esta sesión continuación de la anterior, corresponde, me parece, que se considere el proyecto para el cual hice moción de tratarlo sobre tablas, que la Cámara aceptó. Me refiero al que autoriza las demandas contra la Nación, sin previa autorización del Congreso.

Tengo encargo del miembro informante de la comisión de declarar que está preparado para informar.

**Sr. Presidente.** — La Secretaría informa que no ha sido repartido el proyecto a que hace referencia el señor diputado por la Capital.

**Sr. Varela Ortiz.** — Perfectamente; pero ha sido ya leído y tiene sanción del Honorable Senado, y yo hice moción para que se tratara sobre tablas

el día que de él se diera cuenta, y la Cámara así lo resolvió.

**Sr. Presidente.** — Si no hay oposición, se tratará el proyecto mencionado por el señor diputado Varela Ortiz.

*A la Honorable Cámara de Diputados.*

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado relativo a las demandas contra la Nación; y, por las razones que que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, Septiembre 17 de 1900.

*J. Castellanos. — M. Carlés. — M. de Vedia.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Los tribunales federales y los jueces letrados de los territorios nacionales conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste.

Art. 2º — Si la resolución de la administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos.

Art. 3º — La demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio respectivo y al procurador fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción a las instrucciones que le transmita dicho ministerio.

Art. 4º — El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda, según las distancias, con arreglo a las leyes vigentes, si la demanda se dedujera fuera del territorio de la capital de la República.

Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que corresponda.

Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.

Art. 5º — La Suprema Corte conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces en los casos a que se refiere la presente ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.

Art. 6º — Los jueces letrados de los territorios nacionales elevarán en consulta ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.

Art. 7º — Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorios contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se preteada.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a 18 de Agosto de 1900.

José GÁLVEZ.  
E. Maldes,  
Prosecretario.

**Sr. Presidente.** — Está en discusión en general.

**Sr. Vedia.** — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas, no sólo porque me doy cuenta de la expectativa un tanto impaciente de los señores diputados, y de que participo yo mismo sino porque este proyecto está muy lejos de ser una improvisación, como lo demuestra la votación de la Honorable Cámara con motivo de la moción de mi distinguido colega el señor Varela Ortiz.

No es una improvisación este proyecto, porque casi en análogos términos lo presentó a esta Cámara, el año 1893, el señor diputado Gonnet. Pasó ese asunto a informe de la Comisión de Legislación, que estaba compuesta de distinguidísimos diputados, entre ellos el doctor Bermejo, y lo informó a su nombre, en un erudito y extenso discurso, el señor diputado Castillo. Ese asunto quedó aplazado en el Senado y el año 1896 yo intenté hacerlo revivir; pero

la Comisión de Legislación de esta Cámara no lo despachó. Es el mismo proyecto que, con ligeras variantes, nos viene hoy del Senado. En realidad, no hace sino suprimir el trámite de la venia legislativa para las demandas a la Nación, substituyéndolo por otros procedimientos que tienden a defender a la Nación en casos tales y por el artículo final, que se establece que los fallos condenatorios de la Nación, en esos juicios, no tendrán sino un simple valor declarativo.

Desde antes de la organización de los tribunales federales, la Suprema Corte exigió la venia legislativa para estas demandas; y cuando la misma Corte proyectó la organización de aquellos tribunales, establecía, modificando visiblemente los términos de la Constitución, en su artículo 100, que los tribunales federales entenderían en aquellos asuntos en que la Nación fuera parte «actora». Este agregado de la palabra «actora» dió lugar a un largo debate en la Cámara de 1863, en la que intervino el señor diputado Quintana, haciendo presente, con muy buenas razones, que dando la Constitución no había distinguido, no era posible distinguir y que donde la Constitución había dicho simplemente parte, no era posible entender parte «actora». Se llegó entonces a un término de conciliación, en virtud del cual se dejó en la ley simplemente la palabra parte; y hasta aquí ha venido continuando la jurisprudencia de la venia legislativa, que en realidad, como sabemos, poco significa; y poco significa, desde que encargar o retardar una concesión de venia para demandar al Poder Ejecutivo, importa desde luego una negación o un retardo de justicia, y porque al concederla no tenemos absolutamente la misión de pronunciarnos sobre el derecho del reclamante o del solicitante de la vida. El antecedente está en la Constitución de Estados Unidos; pero la Constitución de Estados Unidos fué reformada precisamente en esta parte por la enmienda 11ª; y tenía una explicación enteramente local. Es sabido que los Estados fueron asediados por multitud de demandas de particu-

lares, que habían quedado fieles a los realistas ingleses, en virtud de las confiscaciones de bienes que los Estados les habían hecho. Entonces vino, como consecuencia natural, esta traba: los Estados no podían ser demandados; y no pudiendo serlo los Estados, con igual razón no podía serlo la Nación.

He prometido informar brevemente y creo que los antecedentes recordados y la ilustración que ha demostrado desde luego la Cámara sobre el asunto bastarán para su sanción.

Entretanto, señor, me parece que esta modificación viene a completar la justicia, hasta ahora deficiente, y que mientras no establezcamos, como Estados Unidos, la Corte de Reclamos, daremos así una seguridad mayor a los que litigan con la Nación en su carácter de persona jurídica, con todas las garantías que el mismo proyecto establece para ésta.

He dicho.

—Se votó en general el proyecto, y es aprobado.

—En discusión el artículo 1º.

Sr. Carlés. — Pido la palabra.

Siguiendo el procedimiento usual, podría resolverse que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Presidente. — Si no hay oposición, así se procederá.

—Asentimiento.

—Se da por aprobado el artículo 1º, y los siguientes hasta el 5º, inclusive.

—En discusión el artículo 6º.

Sr. Sánchez. — Pido la palabra.

Para pedir a la comisión que me explique qué quiere decir esto de «elevará en consulta»: si es efectivamente una elevación al superior tribunal, en apelación, para que resuelva la Corte.

Sr. Lacasa. — La consulta conocida, la del foro, la antigua consulta, que dicen las leyes de procedimientos.

**Sr. Sánchez.** — Voy a explicar lo que quiero saber: es si la Corte debe pronunciarse o no, confirmando o revocando la sentencia de los jueces.

**Sr. Vedia.** — Sí, señor, debe pronunciarse. Es la inteligencia del artículo.

—Se da por aprobado el artículo.

—En discusión el artículo 7º

**Sr. Lacasa.** — Pido la palabra.

Voy a pedir una agregación a este artículo 6º...

**Sr. Presidente.** — Ya está sancionado.

**Sr. Lacasa.** — Entonces, voy a pedir reconsideración.

Observo lo siguiente: que la mente del artículo respecto de la consulta tiene una razón de ser muy importante, porque puede suceder que por descuido de un fiscal, por ejemplo, en muchos casos se produzca una sentencia de un juez federal que importe mucho dinero para el Estado; y entonces, en todos los casos debe establecerse la consulta para el caso en que el fiscal no haya apelado.

**Sr. Castellanos (J.).** — Se trata de los jueces de territorios federales, solamente.

**Sr. Lacasa.** — Yo me pongo en el caso en que el fiscal no apele...

**Sr. Varela Ortiz.** — Se supone que ha de apelar.

**Sr. Lacasa.** — Ha habido casos en que no ha apelado.

**Sr. Presidente.** — ¿El señor diputado hace moción para que se reconsidere el artículo 6º?

**Sr. Lacasa.** — Sí, señor.

**Sr. Presidente.** — Necesito saber si está apoyada la moción del señor diputado. Se necesita el apoyo de la tercera parte de los diputados presentes.

—Resulta suficientemente apoyada.

**Sr. Lacasa.** — Para facilitar la sanción de la modificación que propongo, voy a pedir que se haga como agregado al artículo y no como reconsideración.

**Sr. Presidente.** — Los agregados se proponen antes de votar el artículo.

**Sr. Lacasa.** — O después.

**Sr. Presidente.** — No, señor.

**Sr. Lacasa.** — ¿Por qué?

**Sr. Presidente.** — Porque ya está sancionado el artículo.

**Sr. Lacasa.** — Pero puedo proponer que se agregue un inciso nuevo.

**Sr. Presidente.** — No puede. Todas las modificaciones a un artículo deben hacerse antes de votarlo. No se vota sino cuando está suficientemente discutido.

**Sr. Lacasa.** — Pero un agregado no puede discutirse hasta tanto no haya sido propuesto.

**Sr. Presidente.** — Pero debe ser hecho antes de votar el artículo.

Se votará si se reconsidera el artículo 6º.

**Sr. Lacasa.** — Bien, voy a proponerlo como artículo nuevo.

**Sr. Presidente.** — ¿Entonces desiste de su moción de reconsideración?

**Sr. Lacasa.** — Sí, señor; para facilitar la discusión del artículo.

El artículo sería éste: «Igual consulta harán los jueces federales de la Nación en los casos en que la sentencia no fuera apelada.»

**Sr. Barroetaveña.** — La sentencia condenatoria.

**Sr. Lacasa.** — Condenatoria, sí, señor.

**Sr. Presidente.** — La Cámara debe resolver previamente si el nuevo artículo propuesto debe pasar a comisión o si la Cámara se ha de ocupar inmediatamente de él.

—Se vota si se trata o no el nuevo artículo, y resulta afirmativa.

**Sr. Barroetaveña.** — Pido la palabra.

Voy a proponer un temperamento que concilie el despacho de la comisión con el deseo del señor diputado por Buenos Aires, y que me parece logrará el asentimiento general.

Ese temperamento es el siguiente: «La consulta no tendría objeto en los casos de sentencia absolutoria».

**Sr. Lacasa.** — Ya he aceptado que se ponga sentencia condenatoria.

**Sr. Barroetaveña.** — En la orden del día está sentencia definitiva; y entonces no veo inconveniente en que este artículo se modifique, diciendo: «los jueces federales... etcétera, de todas las sentencias definitivas condenatorias que se pronuncien.»

**Sr. Vedia.** — Pido la palabra.

La comisión, que está en mayoría en el recinto, acepta la modificación propuesta por el señor diputado.

Y voy a aprovechar esta oportunidad para decir que este proyecto ha debido traer las firmas del presidente de la comisión doctor González y del señor diputado Pourouge, que por la precipitación con que ha sido impreso el despacho, no figuran en la orden del día.

**Sr. Lartigau.** — Habiendo aceptado la comisión la modificación que se propone me parece que mejor sería reconsiderar el artículo para comprender las dos disposiciones en una sola redacción.

Así es que hago moción de reconsideración.

**Sr. Presidente.** — Pero ya se ha presentado un nuevo artículo y la Cámara ha resuelto tratarlo inmediatamente.

**Sr. Lartigau.**—Pero creo, señor presidente, que en cualquier tiempo puede pedirse reconsideración de un artículo; y en este caso, como va a comprender los dos artículos en una sola redacción, me parece que no puede haber dificultad.

**Sr. Lacasa.** — Dado el asentimiento de la Cámara, me parece que no hay motivo para no facilitar la corrección de la ley.

**Sr. Presidente.** — Se votará si se reconsidera el artículo 6°.

—Afirmativa.

—En discusión el artículo 6°.

**Sr. Lacasa.** — Propongo en esta forma el artículo: «Los jueces federales y los jueces de los territorios nacionales, elevarán en consulta, ante la Suprema

Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas condenatorias contra la Nación, que se pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.»

**Sr. Ugarriza.** — Pido la palabra.

Cuando se discutió el artículo 6°, refiriéndose este recurso de consulta solamente a los jueces de los territorios, lo creía conveniente porque juzgaba que en los territorios no existe la administración de justicia con todas las garantías necesarias y se propendía así a que inspirase mayor confianza. Pero, extensiva la disposición a los jueces federales, creo que es completamente inconstitucional. No debe olvidarse la Cámara que la Constitución dice expresamente que el Poder Judicial de la Nación residirá en una Corte Suprema de Justicia y en los jueces que el Congreso establecer. La jurisdicción en apelación corresponde a la Corte, y en las causas en que se trate de ministros y cónsules extranjeros, conoce la Corte privativamente.

Según la jurisprudencia de Estados Unidos, establecida en luminosas resoluciones, siendo una disposición constitucional, no puede ni el Congreso mismo investigar a la Suprema Corte de jurisdicción en casos no apelados, fuera de los expresados en la misma disposición constitucional, y entre nosotros siendo idéntica la disposición sólo conoce en grado de apelación; y en la consulta no hay apelación, porque el reclamo contra la resolución no parte de la iniciativa del que se cree agravado, sino del juez que no tiene confianza en sus luces, o más bien como aceptación de la imposición de la ley, bajo el concepto de que el juez nombrado por ministerio de la misma no es suficientemente apto.

Por consiguiente, este artículo es completamente inconstitucional.

**Sr. Lacasa.** — Pido la palabra.

Yo creo que el argumento del señor diputado hubiera tenido la misma aplicación en el caso de los jueces federales, que él ha aceptado, porque la Constitución no admite distinciones. Tan inconstitucional sería en un caso

como en el otro; pero no es inconstitucional en ninguno de los dos, porque la Constitución se ha hecho para el bien del país y no para poner estorbos a la buena administración de justicia.

La Corte conoce en apelación, es cierto; pero, ¿qué significa la consulta? Es una apelación establecida por la ley, en previsión de que un funcionario público pueda ser remiso en el cumplimiento de sus deberes o no apelara si su conciencia le dice que no debe apelar, habiendo, tal vez motivo para ello. Debe un tribunal superior rever los actos de los jueces en asuntos que pueden comprometer altos intereses de la Nación.

No es el primer caso en que un fiscal ha sido destituido por el Poder Ejecutivo, porque a su juicio no cumplió con su deber, dejando de apelar de una sentencia. ¿Y qué ganamos con que se destituya a un fiscal, después que la Nación haya perdido millones de pesos? Mejor es que la ley prevea, en vez de castigar. Es un principio aceptado, que es mejor prever el mal que reprimirlo. Y esto se consigue estableciendo este artículo en la ley.

**Sr. Ugarriza.** — La Corte no puede intervenir sino en grado de apelación fuera de los cuatro casos establecidos en la Constitución.

**Sr. Bermejo.** — Pido la palabra.

No había intervenido en la discusión de este asunto, señor presidente, porque comprendo que la Cámara desea ocuparse más bien de otras cosas; sin embargo, voy a hacer constar mi opinión, brevemente, sobre el proyecto que está en debate.

Creo que es una necesidad sentida la reglamentación, en esta forma, de las demandas contra el Poder Ejecutivo, evitándose así ese sinnúmero de permisos que se presentan al Congreso, que nunca se discuten y que han llegado a ser una mera formalidad.

En mi opinión, y creo haberla manifestado al señor miembro informante de la comisión en la sesión de ayer, toda la dificultad del proyecto consiste en la intervención que se dé a los jueces de territorios. Eliminada la parti-

cipación de los jueces de territorios, que no son los jueces de la Constitución, no habría esta dificultad.

Se dice: es que los jueces de territorio intervienen en estos casos con sujeción a la consulta.

En primer lugar, se reproduce un procedimiento vetusto. La consulta jamás ha existido en materia civil y comercial, no ha existido sino en materia criminal. Y esto se explica, porque tratándose de la vida, de la libertad de un hombre, cuando este mismo era remiso en hacer su defensa, el juez elevaba su sentencia al superior para que la confirmara o revocara. Pero en materia civil y comercial, jamás ha existido. El Honorable Senado ha establecido la consulta de los jueces de los territorios en esta clase de asuntos, porque necesitaba buscar algún control, puesto que sabemos que por la organización de la justicia en los territorios federales, por su misma índole, por la falta de foro suficiente, no es posible que pueda controlarse eficazmente la conducta de esos jueces.

Entonces, la dificultad se subsanaría no dando a los jueces de territorio esta intervención y dejando solamente el conocimiento de estas causas a los jueces federales, que son los únicos jueces de la Constitución, jueces inamovibles; mientras que los de territorio no están en estas condiciones; se eligen por cuatro años.

Entonces, digo, toda la dificultad se subsanaría eliminando del artículo 1º esa intervención de los jueces de territorio en esta clase de causas, dejando que conozcan solamente los jueces federales. Ante esa justicia intervienen siempre procuradores fiscales nombrados por la Nación, y el peligro que indicaba el señor diputado no existiría nunca desde que el fiscal ha de proceder con las instrucciones que le dé el Poder Ejecutivo como lo dispone un artículo del proyecto.

Una vez que se promueva el juicio, el Poder Ejecutivo interviene por medio de su representante legal y éste procede de acuerdo con las instrucciones que el Poder Ejecutivo le da, y si



le ordena que apele, el fiscal apelará, y si el Poder Ejecutivo cree que no procede esa apelación porque considera justo el fallo, el fiscal deberá consentir, como cualquier otro litigante.

Para mí, se salvaría toda la dificultad suprimiendo el artículo 6º que establece la consulta, que ya no tiene razón de ser, y limitando las atribuciones del artículo 1º a las jueces federales.

Esa es mi opinión.

**Sr. Carlés.** — Pido la palabra.

Mi modesta firma aparece subscribiendo este despacho, y natural es, entonces, que emita mi opinión, contestando la muy autorizada que se acaba de oír.

Creo que los jueces de los territorios federales deben desempeñar sus funciones con algún carácter: o con un carácter local o con un carácter constitucional en el orden federal.

Serán locales si les corresponde la legislación general de los tribunales ordinarios; serán federales si tienen atribuciones sobre los asuntos sujetos a la jurisdicción federal.

No siendo de carácter ordinario no pueden ser locales, tienen que ser federales.

Y hay más, señor presidente: hay un inciso en la Constitución, — me refiero al inciso 14 del artículo 67 — que autoriza al Poder Legislativo, es decir, a nosotros, para determinar por una ley especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, nos hace suponer que el carácter de esos jueces es perfectamente federal; porque de otra manera su concepto sería erróneo, como el que caracteriza los llamados jueces ordinarios de la Capital.

Abriendo la Constitución, nos encontramos que ella misma dice que todo gobierno está constituido por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por consiguiente, dentro del gobierno de territorio está la autoridad que desempeña la justicia, autoridad fundamental para la existencia de todo gobierno. ¿Quiénes son los que des-

empeñan esta justicia? Jueces. ¿Cuáles son esos jueces? Los que tiene que designar el Congreso. ¿Cómo se llamarán esos jueces? Para clasificarlos, se les llama jueces de los territorios federales.

Por consiguiente, al distinguir como distingue la ley reglamentaria de esta justicia, la acción y jurisdicción de los jueces de territorio, los tiene que tratar como ellos son, de acuerdo con la denominación que se les da; tienen que ser jueces, pero dentro de la Constitución, puesto que ésta autoriza a este cuerpo dictar leyes sobre el gobierno de los territorios nacionales.

Por eso es que la comisión, en la parte que a mí se refiere, al dar el despacho que está en discusión, lo ha hecho conforme a la Constitución, y conforme a los principios de las leyes generales que deben regir a estas materias.

**Sr. Bermejo.** — Pido la palabra.

Para hacer una salvedad.

Es cierto que los territorios se organizan en virtud de una disposición constitucional; pero se organizan por leyes especiales. Ese Poder Judicial de los territorios nacionales ¿quién lo ha constituido? La ley, y nada más que la ley. Es así que el Congreso ha interpretado la disposición constitucional, organizando el Poder Judicial en los territorios nacionales, disponiendo que los jueces no deben ser permanentes, que no son inamovibles, y que no durarán sino cuatro años. Esa disposición de la ley sería inconstitucional, si esos jueces de los territorios fueran los jueces nacionales de la Constitución. Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde los territorios son organizados exactamente del mismo modo; y Story observa que a los jueces de los territorios los nombra y remueve la ley, y que por consiguiente, están sujetos a la ley misma. No son los jueces de la Constitución.

Con la eliminación que he propuesto, quedaría salvada la dificultad.

**Sr. Carlés.** — Le hago notar al señor diputado que el inciso 14 del artículo 67 de la Constitución habla de legislación especial: luego en el concep-

to de especialidad de estos jueces, está la excepci6n que nos hace notar el se-  
ñor diputado.

**Sr. Ugarriza.** — Desearía saber si la moción del señor diputado tiene por objeto la supresión de la consulta.

**Sr. Bermejo.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Ugarriza.** — Entonces lo acompañaré con mi voto.

—Se rechaza el artículo en la forma sancionada anteriormente.

—Se rechaza igualmente en la siguiente forma:

Los jueces federales y los jueces letrados de los territorios nacionales elevarán en consulta ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas condenatorias contra la Nación que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.

**Sr. Bermejo.** — Pido la palabra.

Con la supresión del artículo no ha quedado salvada la dificultad, pues en el artículo 1º se ha dispuesto que los jueces de los territorios nacionales conozcan en las demandas contra la Nación. Convendría reconsiderar el artículo 1º y suprimir las palabras: «y los jueces letrados de los territorios nacionales».

Hago moción en ese sentido.

—Se aprueba la moción de reconsideración del artículo 1º.

—Se aprueba el artículo 1º del despacho, suprimiendo las palabras: «y los jueces letrados de los territorios nacionales».

—Se aprueba el resto del proyecto.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado.

### 3

## REFORMA DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

*A la Honorable Cámara de Diputados.*

Vuestra Comisión de Instrucción Pública ha estudiado el proyecto de ley remitido por el

Poder Ejecutivo, reduciendo a cinco los colegios nacionales existentes en las provincias, substituyendo los diez restantes por institutos prácticos de artes y oficios, agricultura, industrias, minas, comercio, etcétera, y disponiendo la forma en que las actuales escuelas normales de maestras y mixtas, deberán pasar a ser dependencias de los gobiernos de provincias; y, por las razones que expone el miembro informante, os aconseja que no le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, Agosto 22 de 1900.

*L. Loureyro. — E. Cantón. — A. L. Berrondo. — A. Carbó.*

En disidencia:

*Carlos Olivera.*

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Desde el 1º de Enero de 1901 los colegios nacionales costeados por la Nación en territorio de las provincias, serán: en el centro, el colegio nacional de la ciudad de Córdoba; en el Norte, el colegio nacional de la ciudad de Tucumán; en Cuyo, el Colegio Nacional de la ciudad de Mendoza, y en el litoral, los colegios nacionales de las ciudades de Uruguay y de Rosario.

Art. 2º — Los fondos destinados al sostenimiento de los demás colegios nacionales de provincia, serán aplicados en su totalidad a los objetos del artículo 9º y a la fundación y sostenimiento de institutos prácticos de artes y oficios, agricultura, industria, minas, comercio, etcétera, según las peculiaridades de cada localidad y previo informe del correspondiente gobierno de provincia.

Art. 3º — Las provincias que contaran ya con institutos propios de la especie, podrán optar por la aplicación de los respectivos fondos al mayor ensanche de aquéllos, bajo condición de someter sus planes de estudio a la aprobación del ministerio nacional del ramo y sujetarse a la inspección general del mismo carácter. En tal caso, dichos fondos serán liquidados y entregados por mensualidades en calidad de subsidio nacional conforme a la ley y decretos reglamentarios de subvenciones escolares.